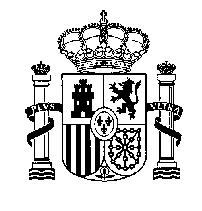
|  |
| --- |
|  |
| MINISTERIO  DE LA PRESIDENCIA, RELACIONES CON LAS CORTES  E IGUALDAD |
|  |

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
|  |  | SECRETARÍA DE ESTADO  DE IGUALDAD |
|  |  |  |
|  |  | Dirección General para la Igualdad de Trato y Diversidad |



**INFORME SOBRE PROTECCIÓN CONTRA LA VIOLENCIA Y LA DISCRIMINACIÓN POR ORIENTACIÓN SEXUAL E IDENTIDAD DE GÉNERO SOLICITADO POR EL EXPERTO INDEPENDIENTE DE NACIONES UNIDAS PARA LA PREPARACIÓN DE LA 41ª SESIÓN DEL CONSEJO DE DDHH**

En relación a la solicitud de aportaciones por parte del Experto independiente de Naciones Unidas, recibida a través de la Oficina de Derechos Humanos del Ministerio de Asuntos Exteriores y Cooperación, desde esta Dirección General se informa lo siguiente, respetando el orden de las preguntas formuladas:

1. ***¿Cuáles son los esfuerzos actuales de los Estados para aumentar su conocimiento sobre población LGBT? Específicamente, sobre si se incluyen preguntas sobre la orientación sexual y la identidad de género en las encuestas gubernamentales (por ejemplo, el censo, las encuestas nacionales de salud, las encuestas sobre ingresos y condiciones de vida u otras encuestas financiadas u ordenada por el Estado), los registros administrativos (por ejemplo, certificados de nacimiento/registros de nacimiento, tarjetas de identidad, registros escolares, licencias profesionales, registros de seguridad social y beneficios públicos y, otros documentos gubernamentales)?***

A pesar de que en la legislación antidiscriminatoria española no hay un mandato legal que obligue a recopilar datos referentes al colectivo LGBTI y no existe un organismo de igualdad con competencias relativas al motivo orientación sexual e identidad de género, en España el gobierno actual está fuertemente comprometido con el reconocimiento y consolidación de los derechos de las personas LGBTI. Impulsar la acción coordinada de todos los departamentos ministeriales implicados en la lucha contra la discriminación y la manifestación más extrema de la LGBTIfobia, como son los crímenes de odio, es una de las prioridades en la agenda política.

La creación, en junio de 2018, de la Dirección General para la Igualdad de Trato y Diversidad, dentro del Ministerio de Presidencia, Relaciones con las Cortes e Igualdad, ha supuesto una apuesta decidida a favor de una sociedad más igualitaria, diversa e inclusiva. En el ámbito de la Administración General del Estado, esta Dirección General ha asumido competencias y funciones en materia de recopilación y gestión de la información. Así, según el Real Decreto que establece su estructura orgánica, además de la programación y coordinación de actuaciones que contribuyan a la promoción de la igualdad de trato y la no discriminación, le corresponde:

* La realización de informes y estudios, el análisis y valoración de estadísticas, así como su difusión e intercambio con otros departamentos ministeriales y entes públicos o privados, de ámbito internacional, nacional, autonómico o local.
* La recopilación de datos y análisis estadísticos relativos a los delitos de odio cometidos contra personas LGBTI en colaboración con los departamentos ministeriales competentes en la materia.

Medir y evaluar los avances que se van produciendo así como el impacto de las políticas que se han puesto en marcha, requiere mejorar los sistemas de recogida de datos y los sistemas estadísticos. En esta tarea están volcados la mayoría de los países de la Unión Europea siguiendo las recomendaciones de la Comisión Europea que, en los tres últimos años ha impulsado importantes iniciativas basadas en la necesidad de mejorar los sistemas de recopilación de datos. Un ejemplo de ello es la creación de dos subgrupos de trabajo enfocados a tal fin. En el marco de los dos High Level Groups que funcionan dentro de la Comisión, existe desde 2016 el Subgrupo dedicado al Hate Speech y, más recientemente dentro del *High Level Goup of Equality, non discrimination and Diversity*, se ha creado el *Equality Data Subgroup*. En ambos España asiste como miembro y participa en los trabajos.

La gestión y producción de información de calidad es vital para visibilizar situaciones que de otra forma no emergerían, por ello trabajar sobre los “equality data” es prioritario para las autoridades y las organizaciones de la sociedad civil. El “European Handbook on equality data” (2016) define estos como “todos aquellos datos desagregados que evidencian la situación de un grupo de similares características”. Una vez recopilados, ordenados, clasificados, analizados e interpretados, son la base para la toma de decisiones a todos los niveles de gobernanza y en todas las fases de cualquier proceso de implantación de estrategias y políticas públicas.

Las políticas basadas en la evidencia son ahora mismo una prioridad para todos los Gobiernos, como lo demuestran estas iniciativas a nivel europeo que están promoviendo en última instancia no sólo que cada país mejore sus sistemas de información, sino que se establezca una cooperación en cuanto al intercambio de metodologías y prácticas. Gestionar la información relativa a la discriminación y los delitos de odio es una tarea compleja y más aún cuando se trabaja con un colectivo tan heterogéneo como la población LGBTI, de la que no se dispone de una cuantificación al no figurar en ningún censo de población. A la hora de recopilar datos los gobiernos se enfrentan con un grupo de población no dimensionado y que es reticente a desvelar su condición sexual o su identidad de género para preservar su intimidad por miedo a ser humillado, estigmatizado o sufrir algún episodio de violencia o discriminación.

En España, como en el resto de países del territorio UE, la recogida de datos está sujeta a la normativa de protección de datos. La *Ley Orgánica 3/2018 de* *Protección de datos personales y garantía de los derechos digitales* establece que la ciudadanía tiene derecho a ser informada del tratamiento de sus datos personales y de las vías para ejercer sus derechos de acceso, rectificación, supresión, derecho a la limitación del tratamiento, así como a la portabilidad y oposición. La entrada en vigor del Reglamento europeo relativo al tratamiento y circulación de datos personales el pasado año ha contribuido a la homogeneización del tratamiento de los datos en toda la UE.

En España la ejecución de los proyectos estadísticos (censos demográficos y económicos, estadísticas sociales, censo electoral etc.) son competencia del Instituto Nacional de Estadística (INE). Encuestas como la *Encuesta Nacional de Salud* o la *Encuesta continua de Hogares* emplean comúnmente como variables de clasificación el sexo, le edad, estado civil, nacionalidad y lugar de residencia, sin que se recojan clasificaciones referidas a la orientación sexual o identidad de género de las personas encuestadas.

Existe un *Plan Estadístico Nacional (2017-2011)*, aprobado por Real Decreto, que es el principal instrumento ordenador de la actividad estadística de la Administración del Estado. Comprende las estadísticas realizadas para fines estatales que están sujetas a la Ley de Estadística Pública (1989), destacándose que:

*Serán objeto de protección y quedarán amparados por el secreto estadístico los datos personales que obtengan los servicios estadísticos tanto directamente de los informantes como a través de fuentes administrativas* (art. 13.1).

Las encuestas de corte sociológico las realiza en Centro de Investigaciones Sociológicas (CIS). Su actividad se orienta a la realización de encuestas que permiten avanzar en el conocimiento de la sociedad española y su evolución a lo largo del tiempo. El CIS desarrolla su función de análisis y conocimiento científico de la sociedad española mediante la realización de encuestas y estudios cualitativos. Estos estudios se llevan a cabo, bien a iniciativa del propio organismo, bien a través de acuerdos con instituciones públicas o privadas sin ánimo de lucro.

Fruto de la colaboración con el CIS, desde el gobierno se han impulsado dos encuestas de carácter integral sobre percepción de la discriminación. Dichas encuestas están en la línea de los datos que recoge el Eurobarómetro especial de Discriminación 2015, que indagan en la opinión de la población general sobre la existencia de discriminación en cuanto a todos los motivos (incluyendo la orientación sexual y la identidad de género), las actitudes hacia la misma, el conocimiento de derechos y la opinión y valoración del alcance de las políticas para combatir la discriminación.

La especial naturaleza de los datos referentes a la comunidad LGBTI y la ausencia de muestras representativas en la aplicaciones estadísticas así como la falta de homogeneización de las categorías y la terminología empleada en los distintos países, impiden tener una radiografía fidedigna de la situación, necesidades y demandas de este colectivo. Algunas recomendaciones de la Comisión Europea a los estados miembros en este sentido, son claras:[[1]](#footnote-1)

* Garantizar la existencia de programas de investigación nacionales centrados en las experiencias de discriminación de las personas trans e intersex.
* Incorporar las dimensiones: orientación sexual, identidad de género y características corporales en las encuestas e investigaciones, incluyendo los censos.
* Animar a los actores sociales, empleadores y docentes especialmente a recopilar datos sobre casos de acoso homofóbico y transfóbico.
* Establecer metodologías y estándares para recopilar datos sobre delitos de odio de carácter homofóbico y transfóbico.
* Mejorar el registro de datos relativos a denuncias ya sea ante organismos de igualdad, órganos judiciales u órganos administrativos responsables de tramitar las denuncias.

En 2013 se realizó la primera *Encuesta sobre percepción de la discriminación en España*, mediante una encomienda de gestión con el Centro de Investigaciones Sociológicas (CIS). Dicha encuesta tenía como objetivo principal obtener datos empíricos fiables con el fin de conocer y cuantificar la percepción que la población general tenía de la discriminación. Basada en una muestra de 2.500 personas de ambos sexos, representativa de la población residente en España de 18 o más años, ha sido la primera aproximación de ámbito nacional y desde un enfoque integral al complejo fenómeno de la discriminación, es decir considerando todos los motivos incluidos en el artículo 19 del TFUE, así como otros motivos que por su alta incidencia de discriminación resultaban preocupantes, como es el caso de la infección por VIH o la identidad de género y, no solamente desde la perspectiva de la percepción sino recogiendo las experiencias de las personas que han sido víctimas directas o indirectas de discriminación. A partir de los datos extraídos de la encuesta, se publicó el informe *Los perfiles de la discriminación en España: análisis de la Encuesta CIS-3.000*

[*http://www.mscbs.gob.es/va/ssi/igualdadOportunidades/noDiscriminacion/documentos/Perfiles\_discriminacion.pdf*](http://www.mscbs.gob.es/va/ssi/igualdadOportunidades/noDiscriminacion/documentos/Perfiles_discriminacion.pdf)

En 2016 se realizó una segunda encuesta, con la finalidad de obtener unos datos comparables a lo largo de un período de tiempo. Como resultado de la explotación de estos datos se ha elaborado un informe en el que se analizan comparativamente los resultados de las dos encuestas.

[*http://www.inmujer.gob.es/actualidad/NovedadesNuevas/docs/2018/EvolucionDiscrimEsp2018-0159.pdf*](http://www.inmujer.gob.es/actualidad/NovedadesNuevas/docs/2018/EvolucionDiscrimEsp2018-0159.pdf)

Ambas encuestas han sido pioneras en España debido a su enfoque integral y al hecho de que se hayan incluido por primera vez preguntas sobre la discriminación hacia las personas infectadas por VIH y las personas transgénero. Igualmente, ambas han contado con financiación europea.

En estos años se han realizado estudios y diagnósticos sobre el estado de la cuestión en dos ámbitos especialmente sensibles a la discriminación y el acoso como son el ámbito educativo y el empleo.

Dentro del programa “Abrazar la diversidad”, desarrollado en el marco de un proyecto financiado por la Comisión se elaboró una guía con propuestas para identificar, combatir y prevenir el acoso homofóbico y transfóbico en la escuela. Además de identificar buenas prácticas y recursos didácticos para trabajar en el aula, así como recursos legales, esta guía ofrece a los integrantes de la comunidad educativa (alumnado, padres y madres, profesorado y autoridades educativas) recomendaciones prácticas y una propuesta de protocolo para detectar y abordar situaciones de acoso escolar homofóbico o transfóbico.

[*https://www.mscbs.gob.es/ssi/igualdadOportunidades/noDiscriminacion/documentos/Abrazar\_la\_diversidad\_v\_d.pdf*](https://www.mscbs.gob.es/ssi/igualdadOportunidades/noDiscriminacion/documentos/Abrazar_la_diversidad_v_d.pdf)

También se elaboró un estudio exploratorio basado en técnicas de investigación cualitativa, por medio de entrevistas personales y focus groups a personas trabajadoras de ambos sexos pertenecientes al colectivo LGBTI. Se trata de un estudio cualitativo que, a través de entrevistas y grupos de discusión, ha permitido conocer las dificultades que estas personas encuentran en el acceso, permanencia y promoción en el mercado laboral, así como su autopercepción de la discriminación vivida. También ha supuesto un acercamiento a la difícil situación de las personas transexuales y su vivencia del proceso de transición hacia el género deseado, analizando específicamente el caso de las mujeres transexuales jóvenes que tienen una mayor vulnerabilidad hacia actitudes transfóbicas precisamente en el acceso al empleo.

[*http://www.inmujer.es/actualidad/NovedadesNuevas/docs/2017/2017LGBTAmbitodelEmpleo.pdf*](http://www.inmujer.es/actualidad/NovedadesNuevas/docs/2017/2017LGBTAmbitodelEmpleo.pdf)

Al mismo tiempo, para hacer frente al problema de la infradenuncia, se han elaborado dos guías prácticas, denominadas *Cómo actuar ante casos de discriminación y delitos de odio e intolerancia*, destinadas a profesionales y a la ciudadanía en general. Ambas guías han sido elaboradas con financiación europea y en colaboración con representantes de administraciones públicas, organizaciones sindicales y entidades sociales. Con el fin de alentar las denuncias, estas dos publicaciones proporcionan una información básica que permita a las personas que hayan sido objeto de un trato discriminatorio o de delitos de odio conocer en términos sencillos y accesibles qué mecanismos de respuesta prevé el ordenamiento jurídico y qué trámites y procedimientos pueden iniciar para impugnar dicha discriminación. Se ha traducido al inglés y al resto de idiomas cooficiales.

[*https://www.msssi.gob.es/ssi/igualdadOportunidades/noDiscriminacion/documentos/2015\_1346\_Guia\_Instituto\_Mujer\_Ciudadanos\_ING\_ACCESIBLE.pdf*](https://www.msssi.gob.es/ssi/igualdadOportunidades/noDiscriminacion/documentos/2015_1346_Guia_Instituto_Mujer_Ciudadanos_ING_ACCESIBLE.pdf)

[*https://www.msssi.gob.es/ssi/igualdadOportunidades/noDiscriminacion/documentos/2015\_1346\_Guia\_Instituto\_Mujer\_Profesionales\_ING\_ACCESIBLE.pdf*](https://www.msssi.gob.es/ssi/igualdadOportunidades/noDiscriminacion/documentos/2015_1346_Guia_Instituto_Mujer_Profesionales_ING_ACCESIBLE.pdf)

En cuanto a la mejora de los datos sobre delitos de odio, hay que señalar que los departamentos competentes en esta materia son los Ministerios de Justicia e Interior, por lo que lo que se expone a continuación se entiende sin perjuicio del superior criterio de dichos departamentos.

La reforma del artículo 510 del Código Penal, la aprobación del Estatuto de la Víctima del delito y la creación de las correspondientes Oficinas de Asistencia a las Víctimas de Delitos, como unidades asistenciales dependientes del Ministerio de Justicia, la creación de 55 servicios especializados en delitos de odio y discriminación en las Fiscalías provinciales, la creación del Registro de incidentes y delitos de odio y la Oficina Nacional de lucha contra los delitos de odio en el Ministerio del Interior, han supuesto un gran avance para el conocimiento y registro de incidentes relacionados con el odio.

La nueva redacción del Código Penal ha previsto en el artículo 22.4 la figura del “agravante del delito” que se aplica en aquellos delitos cometidos “por motivos racistas, antisemitas u otra clase de discriminación referente a la ideología, religión o creencias de la víctima, la etnia, raza o nación a la que pertenezca, su sexo, orientación o identidad sexual, razones de sexo, la enfermedad que padezca o su discapacidad”. Estas circunstancias agravantes constituyen un “numerus clausus” que excluye de la consideración de delito de odio cualquier otra motivación.

El registro de delitos de odio del Ministerio del Interior se apoya en el Sistema Estadístico de Criminalidad (SEC) que, desde el año 2013 se viene perfeccionando y ampliando para poder ofrecer online los datos sobre aquellos delitos e incidentes de odio que se producen en territorio nacional. Al igual que otros estados de la UE, la clasificación y desagregación de motivos se basan en el Código Penal. Los hechos recogidos se desglosan por tipología delictiva y variables como la edad, nacionalidad y sexo de la víctima así como el ámbito donde se produce.

Anualmente el Ministerio da a conocer la cifra de incidentes relacionados con conductas discriminatorias denunciados por la población y registradas por los cuerpos y fuerzas de seguridad del Estado.

[*http://www.interior.gob.es/documents/10180/7146983/ESTUDIO+INCIDENTES+DELITOS+DE+2017+v3.pdf/5d9f1996-87ee-4e30-bff4-e2c68fade874*](http://www.interior.gob.es/documents/10180/7146983/ESTUDIO+INCIDENTES+DELITOS+DE+2017+v3.pdf/5d9f1996-87ee-4e30-bff4-e2c68fade874)

Estas fuerzas de seguridad cuentan con un *Protocolo de actuación*, que constituye el marco de referencia de su actuación. Estos atestados policiales que presentan indicios de agravante basados en la orientación y/o la identidad y expresión de género, se pasan a las Fiscalías especializadas, anteriormente citadas.

En relación a otros registros administrativos en los que figuran datos sobre la identidad y expresión de género, hay que citar el Registro Civil que, a partir de la entrada en vigor de la Ley 3/2007 reguladora de la rectificación registral de la mención relativa al sexo de las personas, recoge datos relativos a la propia autoidentificación del género: “hombre”/ “mujer”. La necesidad de adaptarse a la realidad social actual y el elevado número de menores y mayores de edad a quienes los requisitos de la mencionada ley no ofrecía las suficientes garantías ni respeto a su género sentido, ha hecho que recientemente (octubre de 2018) la Dirección General de Registros y del Notariado dictara una Instrucción sobre el cambio de nombre en el Registro Civil de personas trans. Esta nueva disposición facilita la tramitación del cambio de nombre, especialmente a los menores que no tendrán que esperar a cumplir los 18 años, sino que lo podrán solicitar a partir de los 12 años.

Aunque no existe un servicio estatal que preste atención integral a las víctimas LGBTI, se han adoptado por parte de varios Departamentos Ministeriales estrategias coordinadas de cara a mejorar la respuesta a los incidentes discriminatorios y los delitos de odio, entre las que hay que destacar las siguientes:

* La formación a juristas, fiscales y policía
* La mejora de la recogida de datos oficiales dentro del Sistema Estadístico de Criminalidad, anteriormente citada.
* La colaboración con las organizaciones de la sociedad civil (como es el caso del proyecto “Redes contra el odio”, desarrollado por la Federación Estatal de Lesbianas, Gais, Transexuales y Bisexuales - FELGTB- entre 2014 y 2015, gracias a las subvención otorgada a través de los Fondos EEA).

En el mundo, más de 70 países penalizan y persiguen por ley a las personas LGBTI. En los últimos años y, debido a conflictos bélicos y crisis humanitarias, ha habido un aumento considerable de peticiones de asilo y refugio de personas que por el hecho de ser gais, lesbianas, transexuales o bisexuales se ven obligados a huir ante el miedo a ser detenidos, torturados, maltratados o inclusos asesinados por el mero hecho de. Esta Dirección General es miembro de la Comisión Interministerial de Asilo y Refugio (CIAR) a la que asiste a las reuniones junto con otros Ministerios como el de Trabajo, Asuntos Exteriores, Justicia etc. para valorar los expedientes de petición de asilo y/o refugio por parte de los/as solicitantes que se autoidentifican como LGBTI.

Uno de los retos importantes sobre los que hay que seguir trabajando es la ampliación de la normativa, ya que falta una ley de ámbito estatal que regule los derechos de la población LGBTI y tenga capacidad sancionadora. La actual tramitación de una *Ley integral de Igualdad de Trato y no Discriminación*, vendrá a

solventar y cubrir aquellas brechas que impiden un mayor y mejor conocimiento de la realidad de la discriminación en España. En su articulado, queda recogida la responsabilidad de los poderes públicos en la elaboración de estudios, memorias o estadísticas, indicadores y todos aquellos procedimientos que permitan el conocimiento de las causas, extensión, evolución, naturaleza y efectos de la discriminación. Expresamente queda establecido que los datos de carácter personal quedarán protegidos por el secreto estadístico y no podrán ser objeto de comunicación a terceros salvo los casos establecidos por la legislación vigente en esta materia.

1. ***¿Qué tipo de datos puede recopilar el gobierno para comprender la naturaleza y el alcance de la violencia (por ejemplo, a través de estadísticas sobre los delitos de odio e incitación al odio LGBT), la discriminación y las disparidades en la salud, la educación, el trabajo, la participación cívica y otras áreas importantes?***

Mediante la Ley Orgánica 1/2015 se aprobó la reforma del Código Penal (CP) que supone un endurecimiento del tratamiento penal de los delitos de odio y discurso de odio. Se contemplan distintos supuestos:

* Fomento o incitación al odio contra grupos o personas por su pertenencia a una determinada religión, etnia, origen, sexo, enfermedad u orientación sexual.
* La difusión de material que fomente y promueva odio o violencia
* La negación o enaltecimiento de los delitos cometidos contra grupos o personas por razón de su pertenencia a una determinada religión, etnia, origen, sexo, enfermedad u orientación sexual.
* Se modifican también tipos penales como la “circunstancia agravante” prevista en el artículo 22.4 de dicho Código Penal que se aplica en aquellos delitos cometidos “por motivos racistas, antisemitas u otra clase de discriminación referente a la ideología, religión o creencias de la víctima, la etnia, raza o nación a la que pertenezca, su sexo, orientación o identidad sexual, razones de sexo, la enfermedad que padezca o su discapacidad”.

En el ámbito educativo, no existe un Protocolo único de intervención, ya que las distintas leyes LGBTI a nivel autonómico prevén su propio protocolo. Sin embargo, dentro del citado proyecto de “Abrazar la diversidad”, se propone un modelo de protocolo en 5 fases para la intervención en caso de acoso escolar por homofobia y transfobia entre el alumnado. En la fase de “Investigación” se recoge información a través de las entrevistas al alumnado presuntamente acosador, al alumnado “observador” no participante y al alumnado presuntamente acosado. En todo caso se garantizará que la información recogida en esta fase será tratada de forma confidencial, primando siempre el respeto a la intimidad del alumnado y profesorado.

En el ámbito de la Justicia, La Fiscalía General del Estado recoge en sus Memorias anuales datos sobre los casos de discriminación y delitos de odio juzgados por los tribunales:

[*https://www.fiscal.es/memorias/memoria2017/FISCALIA\_SITE/recursos/pdf/MEMFIS17.pdf*](https://www.fiscal.es/memorias/memoria2017/FISCALIA_SITE/recursos/pdf/MEMFIS17.pdf)

Uno de los retos pendientes es el de abordar la modificación del registro informático de fiscalías, juzgados y tribunales de forma que permita recoger las infracciones penales motivadas por odio y discriminación y conocer la cifra de investigaciones, procedimientos tramitados, escritos de acusación y sentencias dictadas en este ámbito.

1. ***¿Qué salvaguardias existen y qué salvaguardias son necesarias para proteger los derechos humanos de las personas que proporcionan datos personales, así como de las personas que recogen dichos datos? Esta pregunta incluye:***
2. ***Salvaguardias para proteger la privacidad de las personas que proporcionan datos sobre su orientación sexual/identidad de género, y la confidencialidad de los datos proporcionados por estas personas.***

Desde mayo de 2018 se aplica el Reglamento europeo de protección de datos, lo que obliga a las empresas y las autoridades a garantizar la protección de la información de sus usuarios y clientes. Esto implica que la recogida, el almacenamiento, la utilización y la transmisión de datos personales a terceros solo está permitida con el consentimiento expreso de la persona interesado/a y, además, la utilización de los datos deberá estar restringido a objetivos específicos y no ser arbitrario.

Las organizaciones están obligadas a recopilar solo los datos que sean estrictamente necesarios para el cumplimiento de sus objetivos y a garantizar que el volumen de información almacenada esté, siempre y en todo caso, lo más minimizada posible. Los datos relativos a la orientación sexual o identidad de género de las personas son datos de carácter personal sujetos a normas estrictas y solo pueden ser recabados y tratados previo consentimiento expreso de la persona o exista interés público legítimo en dicha información.

Hay varias categorías de datos de carácter personal que por su especial condición requieren mayores garantías y requisitos para su uso legítimo. Es el caso de aquellos que hacen referencia el origen étnico o racial, los que supongan el tratamiento de datos genéticos, datos biométricos dirigidos a identificar de manera unívoca a una persona física, datos relativos a la salud o datos relativos a la vida sexual o la orientación sexual de una persona física. Solo podrán ser objeto de tratamiento, incluyendo su cesión o comunicación a un tercero, cuando por razones de interés general así lo disponga una Ley o se preste consentimiento de forma explícita.

1. ***Normas estatutarias o políticas administrativas más amplias para asegurar la transparencia y la rendición de cuentas en las instituciones gubernamentales, como los organismos de estadística.***

Tal como se ha comentado en el primer apartado, el CIS como organismo oficial dependiente del Ministerio de la Presidencia, Relaciones con las Cortes e Igualdad, es responsable del diseño y realización de encuestas y diagnósticos cualitativos y cuantitativos a iniciativa propia o a demanda de otras instituciones públicas o privadas sin ánimo de lucro. En su propia página web se afirma que en el “fichero de datos” empleado en las encuestas, no se conserva ninguna información que permita la identificación de las personas que han participado en ellas.Las variables de uso más frecuentes cuando se pregunta sobre características de las personas entrevistadas son: el sexo, la edad, nacionalidad, nivel de estudios o la ocupación. Todas las respuestas son anónimas, protegidas por las leyes del secreto estadístico y de protección de datos. Las respuestas se utilizan de forma agregada, sin referencias individuales de ningún tipo. No se conserva ningún dato personal o identificador de quien ha respondido, y, una vez grabada la información que contienen, los cuestionarios son destruidos. El CIS realiza labores de supervisión e inspección del proceso de realización de las entrevistas, para garantizar así la calidad de los datos que recoge.

1. ***¿Cuáles son los riesgos asociados con la recopilación y gestión de datos sobre orientación sexual e identidad de género y las iniciativas para superar esos riesgos?***

Uno de los riesgos es la manipulación de los datos con fines políticos o ideológicos, o con la intención de perseguir a las personas o grupos por su origen racial o étnico, con fines racistas o xenófobos o provocar la exclusión y estigmatización de un grupo de población por motivos LGTBIfóbicos. Por ello, no está permitido que los datos obtenidos en las encuestas, ya sean opiniones o datos sobre el perfil sociodemográfico de la persona encuestada, puedan ser cruzados con ficheros de datos personales.

1. ***¿Existen circunstancias en las que la recopilación de datos no es aconsejable, como en países que penalizan las conductas sexuales consentidas entre adultos o en los que determinados organismos gubernamentales han demostrado ser motivo de preocupación en relación con el tratamiento de la orientación sexual o identidad de género?***

No es el caso de España, país que como demuestran las estadísticas europeas (Eurobarómetro, y la EU- LGBT survey de la FRA de 2013), es uno de los países más avanzado en cuanto a reconocimiento de los derechos de las personas LGBTI. No solamente el marco normativo e institucional apuesta por la diversidad sexual, de género y familiar sino que también la sociedad española se muestra especialmente respetuosa.

La aprobación plena del matrimonio entre homosexuales ha experimentado, según la *Encuesta sobre percepción de la discriminación en España* (2016) un aumento, llegando al 64% de la población encuestada. Esta misma encuesta concluye que la reasignación de género por parte de las personas transexuales es aprobada “por completo” por un 65% de la población.

1. ***¿Cuándo los Estados realizan actividades de recopilación de datos, en qué medida la sociedad civil puede participar de manera significativa en el diseño e implementación de estos programas? Esta pregunta incluye lo siguiente:***
2. ***¿Tienen los Estados políticas que guíen el proceso de participación de la sociedad civil en programas nacionales de estadística y otros esfuerzos del estado para aumentar el conocimiento sobre poblaciones LGBT?***

Uno de los aprendizajes más importantes en materia de elaboración de estadísticas y estudios es que hay que entablar relaciones colaborativas con las organizaciones de la sociedad civil que trabajan en el ámbito de la comunidad LGTB. Hasta la fecha siempre se han abierto procesos participativos con las entidades especializadas y los agentes sociales. Todos los estudios y encuestas han sido sometidos a procesos de consulta y contraste de resultados, por lo que todos ellos han contado con el respaldo de estas organizaciones.

En cuanto a las iniciativas desarrolladas por las entidades sociales LGBTI, la mayoría han contado con apoyo institucional por parte de esta Dirección General. En este sentido hay que señalar que el pasado 29 de noviembre de 2018, en la sede de la Secretaría de Estado en Madrid, se presentó el Informe anual *LA CARA OCULTA DE LA VIOLENCIA HACIA EL COLECTIVO LGTBI 2018* sobre delitos de odio e incidentes discriminatorios a la población LGTBI en España, elaborado por el *Observatorio Redes contra el odio*, coordinado por la Federación Estatal de Lesbianas, gais, trans y bisexuales (FELGTB), cuyo objetivo fundamental es la recogida y sistematización de la información relacionada con este tipo de delitos. Para ello se emplean diversas fuentes de información:

* Testimonios de las personas que acuden a los servicios de atención y orientación a víctimas de las entidades miembro de la FELGTB.
* Testimonios de las personas que acuden al Servicio de atención sobre delitos de odio de la Línea Arcoíris de FELGTB.
* Informaciones procedentes de medios de comunicación

La organización FELGTB impulsó este Observatorio en 2014 gracias a una financiación del *Programa de Ciudadanía Activa* a través del Mecanismo Financiero EEA de Islandia, Liechtenstein y Noruega. Unos años más tarde este programa ha sido beneficiario de varias subvenciones anuales con cargo a la asignación tributaria del IRPF.

1. ***¿Tiene la sociedad civil la capacidad, en términos de experiencia y conocimientos técnicos, de participar de manera significativa en los esfuerzos del Estado para recopilar datos?***

Desde 2014 en la convocatoria anual de subvenciones a programas sociales de interés general con cargo a la asignación tributaria de la Declaración de la Renta, se cuenta con una línea específica destinada a reforzar la atención y orientación a las víctimas de discriminación y delitos de odio e intolerancia, bajo la cual en las tres últimas convocatorias correspondientes a 2016, 2017 y 2018 el Estado ha subvencionado cinco proyectos dirigidos a las víctimas de la comunidad LGBT por un importe total de 85.045€.

En España, las organizaciones LGBTI están desarrollando una importante actividad en el área de producción de conocimiento, si bien la falta de recursos económicos hace inviable cualquier intento de encuesta a gran escala por lo que es importante entablar acuerdos de cooperación para poder contar con el asesoramiento experto de estas entidades, especialmente en relación a la terminología a utilizar, la identificación de las identidades diversas que muestran las personas transgénero e intersex, la selección de informantes para las entrevistas, las posibles respuestas en función de las clasificaciones o las preguntas abiertas.

1. ***¿Qué constituye una participación significativa en esta área?***

La existencia desde 2016 de un ACUERDO INTERMINISTERIAL suscrito entre varios departamentos ministeriales y organismos del Estado para cooperar institucionalmente en la lucha contra el racismo, la xenofobia, la LGBTIfobia y otras formas de intolerancia. Dicho Acuerdo se articula a través de un Plan de trabajo en torno a cuatro Grupos temáticos:

* G.T. de Formación
* G.T de recopilación de sentencias
* G.T. de Estadística
* G.T. sobre Discurso de Odio.

En los grupos de trabajo están presentes como observadoras las organizaciones de la sociedad civil más representativas de las materias objeto de este acuerdo. Esta iniciativa constituye una buena práctica de colaboración sector público-sector privado, que ha sido recogida por la Comisión Europea en el “Compendium” que se ha elaborado en el seno del Subgrupo de “Equality Data”.

1. ***La falta de un esquema de clasificación global, ¿conlleva el riesgo de que los datos no sean útiles para las comparaciones internacionales o no reflejen con precisión las identidades y realidades vividas por las poblaciones locales?***

Dentro del Subgrupo “Equality Data” de la Comisión Europea, se ha trabajado desde un punto de vista “operativo” una serie de pautas a seguir para la homogeneización de metodologías y en especial de la terminología y los conceptos que difieren de un país a otro dando lugar a clasificaciones de la información dispares. Uno delos puntos sobre los que se insiste en el manual que se ha elaborado conjuntamente[[2]](#footnote-2), es el de la comparabilidad de los datos, que solo es posible cuando el diseño, olas definiciones y las clasificaciones a utilizar se basan en documentación veraz y bien documentada.

Es cuanto cabe informar desde este Centro directivo

El Director General,

Ignacio Sola Barleycorn

1. European Commission (2017) Data collection in relation to LGBTI people: analysis and comparative review of equality data collection practices in the European Union. [↑](#footnote-ref-1)
2. European Commission. High Level Group on Non-discrimination, Equality and Diversity (2018). Guidelines on improving the collection and use of equality data [↑](#footnote-ref-2)